

CONTESTACION DEMANDA CON RADICADO 2021-00025-00 - DEMANDANTE: MARYI ULTENGO Y OTROS

notificacionjudicial inza-cauca.gov.co <notificacionjudicial@inza-cauca.gov.co>

Lun 28/03/2022 4:02 PM

Para: Juzgado 10 Administrativo - Cauca - Popayan <jadmin10ppn@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Andrea Maria Orozco Caicedo <amorozcoc@procuraduria.gov.co>; procesosnacionales@defensajuridica.gov.co <procesosnacionales@defensajuridica.gov.co>; Notificaciones Judiciales <notificacionesjudiciales@icbf.gov.co>; Dayana Ordoñez <emssanarsas@emssanar.org.co>; juridica@hospitalsan jose.gov.co <juridica@hospitalsan jose.gov.co>; DAMARIS ORDOÑEZ MARTINEZ <notificacionesjudiciales@popayan.gov.co>; aefernandez@unicauca.edu.co <aefernandez@unicauca.edu.co>

Doctora

JENNY XIMENA CUETIA FERNANDEZ

Juez Decimo Administrativo de Popayán

Carrera 4 No. 1 – 67 Barrio La Pamba

Popayán (Cauca)

Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Radicado: 19-001-33-33-010-2021-00025-00

Accionante: Maryi Yeraldin Ultengo Sánchez

Accionado: Municipio de Inzá y Otros



MIGUEL ANGEL ARIAS ORTEGA, abogado en ejercicio, con domicilio y residencia en la Ciudad de Inzá (Cauca), identificado con CC. No. 76.245.538 de Inzá y tarjeta profesional No. 123134 del C.S.J., actuando en nombre y representación del Municipio de Inzá, de conformidad con el poder anexo, comedidamente dentro de la oportunidad procesal correspondiente, por medio del presente escrito procedo a contestar la demanda en el término y forma legal del MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, formulada ante su despacho por los señores Maryi Yeraldine Ultengo Sancho; Germán Ultengo; Esneida Sancho Ultengo, Edwin Faiver Ultengo Sancho, Yaira Andrea Ultengo Sancho, Odeiva Sancho Ultengo, Mileydi Sancho Ultengo, Yilder Sancho Ultengo, Arnulfo Sancho Sánchez, Ernestina Ultengo Pajoy, Manuel Eliseo Sancho Sánchez, José Belmer Ultengo Oidor, Luz Enid Sancho Ultengo, Biyeli Aide Sancho Ultengo, Amelia Sancho Ultengo, Natalia Ultengo Sancho.

De conformidad con el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, el párrafo del artículo 3 del Decreto 806 de 2020 y el numeral 14 del artículo 78 de la Ley 1564 de 2012, se envía el presente memorial a las demás partes del proceso.

Cordialmente,

Miguel Angel Arias Ortega

CC. 76.245.538 de Inzá

	<p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE INZÁ- NIT: 800.004.741 – 1</p>	
	<p>DESPACHO DEL ALCALDE</p>	

Doctora

JENNY XIMENA CUETIA FERNANDEZ

Juez Decimo Administrativo de Popayán

Carrera 4 No. 1 – 67 Barrio La Pamba

Popayán (Cauca)

Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Radicado: 19-001-33-33-010-2021-00025-00

Accionante: Maryi Yeraldin Ultengo Sánchez

Accionado: Municipio de Inzá y Otros



MIGUEL ANGEL ARIAS ORTEGA, abogado en ejercicio, con domicilio y residencia en la Ciudad de Inzá (Cauca), identificado con CC. No. 76.245.538 de Inzá y tarjeta profesional No. 123134 del C.S.J., actuando en nombre y representación del Municipio de Inzá, de conformidad con el poder anexo, comedidamente dentro de la oportunidad procesal correspondiente, por medio del presente escrito procedo a contestar la demanda en el término y forma legal del MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, formulada ante su despacho por los señores Maryi Yeraldine Ultengo Sancho; Germán Ultengo; Esneida Sancho Ultengo, Edwin Faiver Ultengo Sancho, Yaira Andrea Ultengo Sancho, Odeiva Sancho Ultengo, Mileydi Sancho Ultengo, Yilder Sancho Ultengo, Arnulfo Sancho Sánchez, Ernestina Ultengo Pajoy, Manuel Eliseo Sancho Sánchez, José Belmer Ultengo Oidor, Luz Enid Sancho Ultengo, Biyeli Aide Sancho Ultengo, Amelia Sancho Ultengo, Natalia Ultengo Sancho, representados mediante apoderado judicial contra el Municipio de Inzá, del cual hoy represento los intereses jurídicos judiciales, de conformidad con los siguientes argumentos; manifestando de forma anticipada que nos oponemos totalmente a las pretensiones, declaraciones y condenas solicitadas por el demandante.

1. A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

AL HECHO 1. Es cierto.

AL HECHO 2. No nos consta que se pruebe.

AL HECHO 3. No nos consta que se pruebe,

	<p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE INZÁ- NIT: 800.004.741 – 1</p>	
	<p>DESPACHO DEL ALCALDE</p>	

AL HECHO 4. No es cierto. Se pone de presente que el ICBF hace presencia con sus programas en el Municipio de Inzá Cauca, el Centro Zonal Indígena de la Regional Cauca del ICBF, desarrolla diferentes programas de primera infancia, no solo en la cabecera del municipio de Inzá, sino también en su área rural, prestando servicios como Desarrollo Infantil en medio Familiar – DIMF- , Centro de Desarrollo Infantil – CDI- y Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar, los cuales son ofrecidos a toda la comunidad en general del Municipio de Inzá.

AL HECHO 5. No nos consta, Que se pruebe.

AL HECHO 6. No nos consta, Que se pruebe.

AL HECHO 7. No nos consta, de las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones.

AL HECHO 8. Es cierto.

AL HECHO 9. No nos consta, de las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones.

AL HECHO 10. No es cierto. Como se evidencia a la niña se le asignó afiliación a régimen subsidiado con la Empresa Prestadora de Servicios de Salud – Emssanar como lo describen los demandantes.

AL HECHO 11. Es cierto. Teniendo en cuenta copia de historia clínica que se allega al proceso, se tiene que el día 7 de septiembre de 2018 la señora MARY TERALINE ULTENGO SANCHO dio a luz a su hija EMILIANA ULTENGO SANCHO con 29 semanas de gestación.

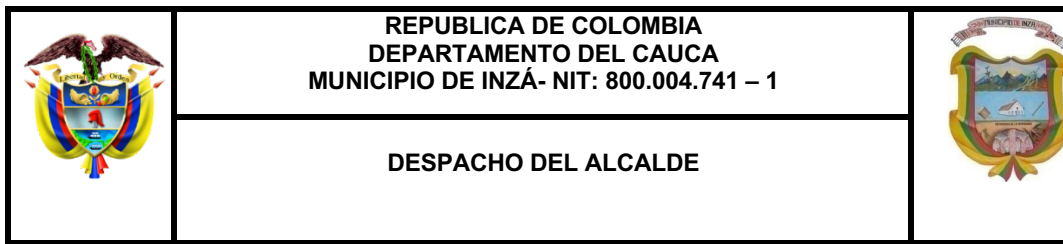
AL HECHO 12: Es cierto, de acuerdo a las pruebas aportadas.

AL HECHO 13: Es cierto, de acuerdo a las pruebas aportadas.

AL HECHO 14: No nos consta, de las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones.

AL HECHO 15. Es cierto. Según historia clínica que se aporta en la demanda.

AL HECHO 16. Es cierto. Según historia clínica que se aporta en la demanda.



AL HECHO 17. No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones.

AL HECHO 18. Es cierto. Según historia clínica que se aporta en la demanda.

AL HECHO 19. No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones.

AL HECHO 20. No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones.

AL HECHO 21. No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones, además son situaciones ajenas a mi representado.

AL HECHO 22. Es cierto. Según anotaciones registradas en historia clínica.

AL HECHO 23. Es cierto. Según anotaciones registradas en historia clínica.

AL HECHO 24. Es cierto. Según anotaciones registradas en historia clínica.

AL HECHO 25. Es cierto. Según anotaciones registradas en historia clínica.

AL HECHO 26. Es cierto. Según anotaciones registradas en historia clínica.

AL HECHO 27. Es cierto. Según anotaciones registradas en historia clínica.

AL HECHO 28. Es cierto. Según anotaciones registradas en historia clínica. Las otras afirmaciones no nos consta.

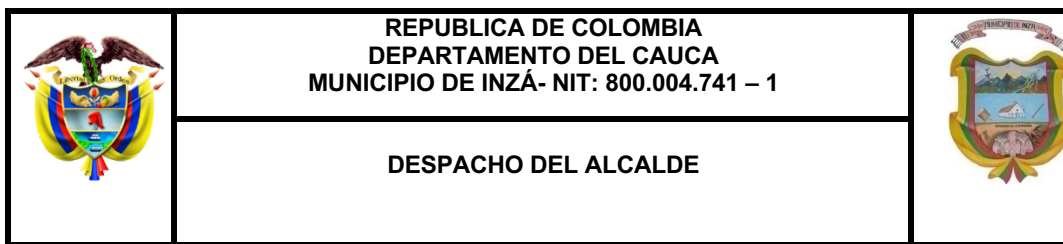
AL HECHO 29. Es cierto. Según anotaciones registradas en historia clínica.

AL HECHO 30. Es cierto. Según anotaciones registradas en historia clínica.

AL HECHO 31. Es cierto. Según anotaciones registradas en historia clínica.

AL HECHO 32. Es cierto. Según anotaciones registradas en historia clínica.

AL HECHO 33. Es cierto. Según anotaciones registradas en historia clínica.



AL HECHO 34: Es cierto. Según anotaciones registradas en historia clínica.

AL HECHO 35: Es cierto. Según anotaciones registradas en historia clínica. Las otras afirmaciones no nos consta.

AL HECHO 36: No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones.

AL HECHO 37: No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones.

AL HECHO 38: No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones.

AL HECHO 39: No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones.

AL HECHO 40: No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones y son ajenas a mi representado.



AL HECHO 41: No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones, además son situaciones ajenas a mi representado.

AL HECHO 42: No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones, además son situaciones ajenas a mi representado.

AL HECHO 43: No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones, además son situaciones ajenas a mi representado.

AL HECHO 44: No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones, además son situaciones ajenas a mi representado.

AL HECHO 45: No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones, además son situaciones ajenas a mi representado.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE INZÁ- NIT: 800.004.741 – 1	
	DESPACHO DEL ALCALDE	

AL HECHO 46: No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones, además son situaciones ajenas a mi representado.

AL HECHO 47: No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones, además son situaciones ajenas a mi representado.

AL HECHO 48: No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones, además son situaciones ajenas a mi representado.

AL HECHO 49: No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones, además son situaciones ajenas a mi representado.

AL HECHO 50: Es cierto, de acuerdo a lo consigando en la historia clínica.

AL HECHO 51: No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones, además son situaciones ajenas a mi representado..

AL HECHO 52: No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones, además son situaciones ajenas a mi representado.

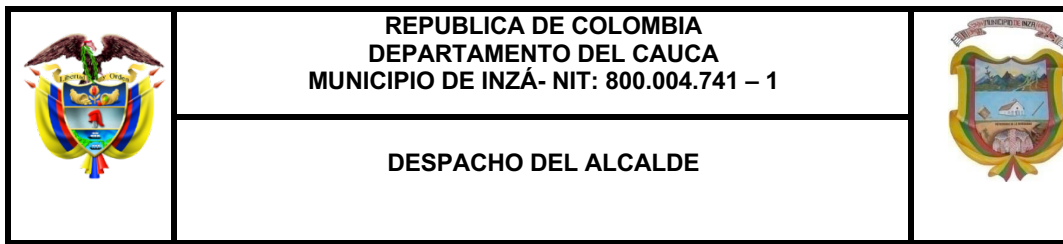
AL HECHO 53: No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones, además son situaciones ajenas a mi representado.

AL HECHO 54: Es cierto. De conformidad a lo establecido en la histórica clínica.

AL HECHO 55: Es cierto. De conformidad a lo establecido en los informes del equipo psicosocial de la Defensoría de Familia del ICBF.

AL HECHO 56: Es cierto. De conformidad a lo establecido en la histórica clínica.

AL HECHO 57: No nos consta. De las pruebas obrantes en el proceso, no se encuentran probadas estas afirmaciones, además son situaciones ajenas a mi representado.



AL HECHO 58: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 59: Es cierto. De conformidad a lo establecido en la histórica clínica

AL HECHO 60: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 61: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 62: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 63: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 64: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 65: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 66: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.



AL HECHO 67: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 68: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 69: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 70: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 71: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE INZÁ- NIT: 800.004.741 – 1	
	DESPACHO DEL ALCALDE	

AL HECHO 72: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 73: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 74: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 75: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto, deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 76: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 77: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 78: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 79: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.



AL HECHO 80: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 81: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 82: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 83: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 84: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE INZÁ- NIT: 800.004.741 – 1	
	DESPACHO DEL ALCALDE	

AL HECHO 85: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 86: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 87: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 88: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 89: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 90: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 91: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 92: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 93: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto, deberán ser debidamente probados dentro del proceso.



AL HECHO 94: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 95: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 96: Es cierto, de acuerdo a lo consignado en la historia clínica.

AL HECHO 97: No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 98: : No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

	<p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE INZÁ- NIT: 800.004.741 – 1</p>	
	<p>DESPACHO DEL ALCALDE</p>	

AL HECHO 99: : No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 100: : No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 101: : No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 102: : No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 103: : No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 104: : No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 105: Es cierto, según lo consignado en la historia clínica.

AL HECHO 106: : No me consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 107: No nos consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

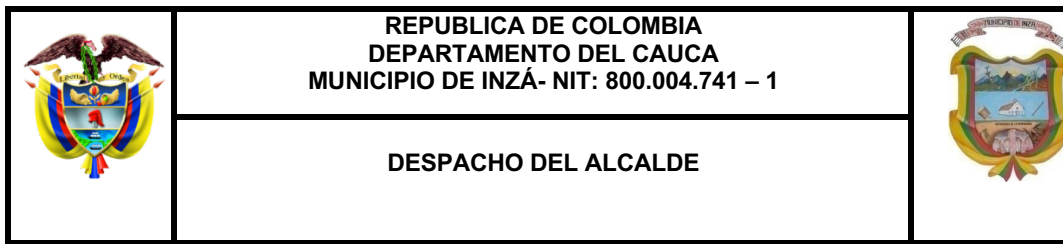
AL HECHO 108 : No nos consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 109: No nos consta.

AL HECHO 110: No nos consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto, deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

AL HECHO 111: No nos consta. Son hechos ajenos a mi representada, por tanto, deberán ser debidamente probados dentro del proceso.

2. RAZONES DE LA DEFENSA





El artículo 90 de la Constitución Política consagra la cláusula general de responsabilidad civil extracontractual del Estado, determinando la concepción de imputar la responsabilidad patrimonial de los daños antijurídicos ocasionados por los agentes estatales. La anterior clausula no aplica per se por la existencia de un daño, toda vez que este daño tendrá que ser antijurídico e imputable al ente estatal para que tenga el carácter de indemnizable, tal cláusula de responsabilidad del Estado no opera de manera automática ante la constatación o verificación de que existió o pudo configurarse una falla del servicio, es indefectible además que exista un daño que haya sido originado en el comportamiento de la entidad a la cual se le imputa el mismo.

En ese orden, la responsabilidad del Municipio de Inzá sería patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar. Verificada la ocurrencia de un daño y su antijuridicidad, surge el deber de indemnizarlo, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido. Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración.

Del acervo probatorio obrante en la demanda se logró acreditar el primer elemento, es decir, el daño antijurídico consistente en la muerte de la menor. Al estar demostrado el daño, se establecerá si el Municipio de Inzá incurrió en acciones u omisiones por las cuales, jurídicamente, se le deba imputar responsabilidad. En cuanto al segundo elemento, la imputación no es otra que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Municipio, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto y estar plenamente acreditado y para ser imputable al municipio deberá demostrarse la falla del servicio atribuida y la relación de causalidad, esto es, la comprobación de que el daño que se produjo fue como consecuencia directa y eficiente de la falla del servicio, por acción u omisión y en el presente no se logra acreditar ni el segundo ni el tercer elemento respecto del Municipio de Inzá. En torno a la relación de causalidad tampoco se demostró, sin falla del servicio del Municipio de Inza, no hay nexo con el daño.

La demandante no individualiza la causalidad adecuada y determinante del daño o la imputación para atribuir responsabilidad al Municipio de Inzá, expresa muchas

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE INZÁ- NIT: 800.004.741 – 1	
	DESPACHO DEL ALCALDE	

condiciones, pero la causante del presunto daño conforme a las afirmaciones, negaciones y lo evidenciado en el proceso por los antecedentes y reglas de probabilidades, sólo es atribuible a la víctima, al ICBF, las IPS y la EPS EMSSANAR.

No existe falla en el servicio por parte del Municipio de Inzá por acción u omisión que le sea jurídicamente imputable, como tampoco, existe ninguna relación de causalidad directa y adecuada entre los presuntos daños invocados por los demandantes y el Municipio, en el presente caso existen varios eximentes de responsabilidad.

Del acervo probatorio obrante en la demanda no existe plena prueba que logre acreditar una relación de causalidad directa, eficiente y única que determine que el daño que se produjo fue como consecuencia de la acción u omisión atribuible al Municipio de Inzá. Conforme a lo evidenciado en el acervo probatorio forzoso es concluir la inexistencia de responsabilidad administrativa del Municipio, toda vez que para configurarse responsabilidad deben acreditarse los elementos de la misma y en ausencia de uno de ellos, debe denegarse la responsabilidad de la entidad.

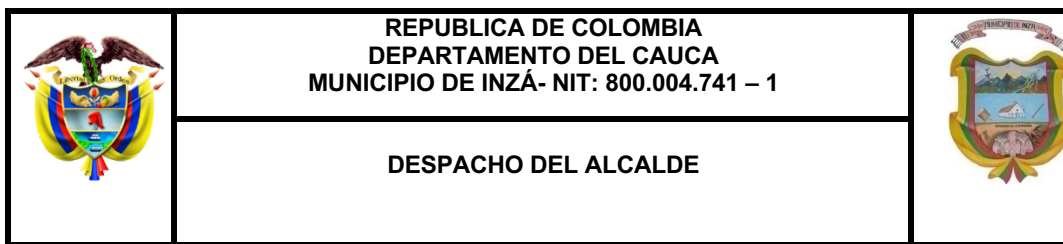
Se concluye que con relación al Municipio de Inzá no se acreditó su responsabilidad e imputación fáctica y jurídica. La parte actora no cumplió con la carga probatoria de acuerdo al artículo 167 de la Ley 1564 de 2012.

En el presente caso es procedente la declaración de las siguientes excepciones: Falta de legitimación en la causa material por pasiva, Culpa exclusiva de la víctima, Hecho de un tercero, Inexistencia de falla del servicio y Ausencia de Nexo Causal entre los perjuicios reclamados por la parte demandante y la conducta del Municipio de Inzá.

3. EXCEPCIONES DE MERITO

PRIMERA: FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA

La legitimación en la causa por el lado activo, es la identidad del demandante con el titular del derecho subjetivo, es decir, con quien tiene vocación jurídica para reclamarlo y, **por el lado pasivo, es la identidad del demandado con quien tiene el deber**





correlativo de satisfacer el derecho¹. La legitimación es, por lo tanto, un presupuesto material de la sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado.²

Con relación al tema de la legitimación en la causa, la sección segunda del Honorable Consejo de Estado, en sentencia del 25 de marzo de 2010 expediente 05001-23-31-000-2000-02571-01 (1275-08), M.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sostuvo:

*“...En reciente jurisprudencia, esta Corporación ha manifestado en cuanto a la legitimación en la causa, que la misma no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable bien a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado. Así mismo, ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa, siendo la legitimación en la causa de hecho la relación procesal existente entre demandante legitimado en la causa de hecho por activa y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma quien asumirá la posición de demandado; dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; **la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.** En un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, **pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a***

¹ Sentencia de 13 de febrero de 1996, exp. 11.213. En sentencia de 28 de enero de 1994, exp. 7091, el Consejo de Estado expuso: “En todo proceso el juzgador, al enfrentarse al dictado de la sentencia, primeramente deberá analizar el aspecto relacionado con la legitimación para obrar, esto es, despejar si el demandante presenta la calidad con que dice obrar y si el demandando, conforme con la ley sustancial, es el llamado a enfrentar y responder eventualmente por lo que se le enrostra. En cuanto a lo primero, se habla de legitimación por activa y en cuanto a lo segundo, se denomina legitimación por pasiva”.

² Sentencia de 1º de marzo de 2006, exp. 15.348.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE INZÁ- NIT: 800.004.741 – 1	
	DESPACHO DEL ALCALDE	

dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra....” (Negrilla de la Sala)

De los anteriores elementos, se puede extraer que, El Municipio de Inzá no es la persona jurídica a la que le puede endilgar la responsabilidad por los hechos expuestos por los demandantes. Al Municipio de Inzá, no le correspondía prestar los servicios de salud los cuales estaban a cargo de EMSSANAR y la IPS San José a la niña Emiliana Ultengo; como tampoco, el restablecimiento de derechos que de acuerdo a las pruebas obrantes en el proceso las había asumido el ICBF por intermedio de sus operadores contratados.

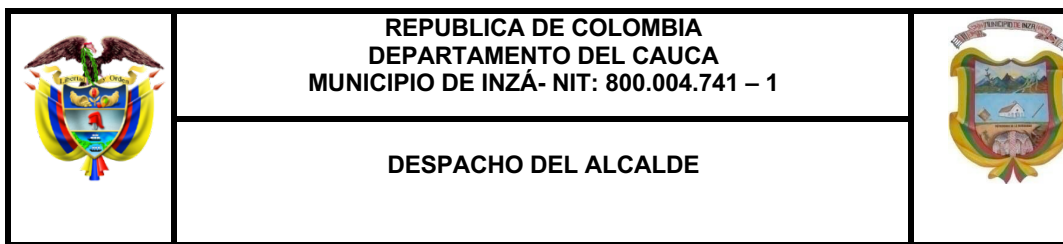
SEGUNDA: INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO E INEXISTENCIA DEL NEXO DE CAUSALIDAD

No obra en el expediente prueba que demuestre el nexo causal entre el actuar y la omisión por parte del Municipio de Inzá (Cauca) y el daño causado a la niña Emiliana Ultengo. No existe título de imputación que permita atribuirle al Municipio de Inzá (Cauca) el daño antijurídico, ni relación de causalidad que indique que el hecho dañoso lo vincula de forma directa y exclusiva con el hecho sucedido con la muerte de la niña Emiliana Ultengo. Para deducir dicha responsabilidad no basta acreditar la ocurrencia de tales actos sino que es necesario demostrar además que ellos sean constitutivos de una falla en el servicio, riesgo excepcional o un daño especial, de conformidad con los criterios que la ley y la jurisprudencia han desarrollado.

Al respecto el Consejo de Estado en sentencia de fecha 07 de julio de 2011 con radicado 25000- 23- 26- 000- 1997- 03369- 01 (19707), Magistrada Ponente Olga Melida Valle de la Hoz, sostuvo:

“La responsabilidad patrimonial de la Administración es una institución jurídica que goza en nuestros días de rango constitucional. Es evidente que la responsabilidad del Estado a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cual como lo ha venido sosteniendo en forma reiterada esta Sala, estableció sólo dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación del mismo a una autoridad en sentido lato o genérico.

El inciso primero del texto constitucional antes señalado, es del siguiente tenor literal:



"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

"(...)" (negritas fuera del texto original).

La jurisprudencia de esta Corporación así lo ha entendido, cuando ha dicho:

"porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

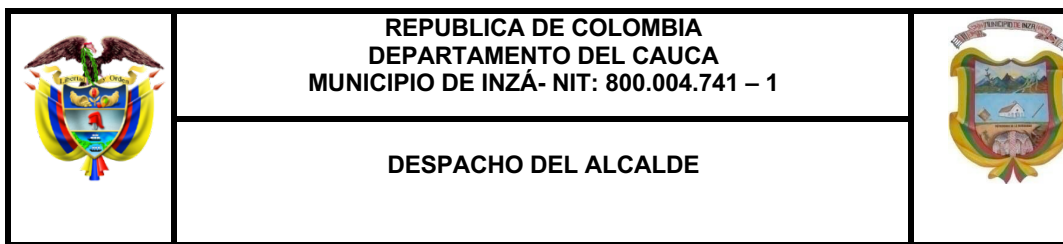
"La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión"¹⁰.

"Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño, por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento.

"Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores¹¹, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.

"En efecto, en sentencia proferidas dentro de los procesos acumulados 10948 y 11643 y número 11883, se ha señalado tal circunstancia precisándose en ésta última, que "... es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado...", y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado"¹²(Cursivas fuera de texto)

La anterior posición, según la cual el principal elemento configurativo de la responsabilidad del Estado corresponde al daño antijurídico, se ve igualmente reflejado en los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente, en donde en la



ponencia para segundo debate (de la disposición que fuera a convertirse en el actual artículo 90 de la Carta Política), se precisó:

"(...) La noción de daño en este caso, parte de la base de que el Estado es el guardián de los derechos y garantías sociales y que debe, por lo tanto, reparar la lesión que sufre la víctima de un daño causado por su gestión, porque ella no se encuentra en el deber jurídico de soportarlo.

"La responsabilidad se deriva del efecto de la acción administrativa y no de la actuación del agente de la administración causante material del daño, es decir, se basa en la posición jurídica de la víctima y no sobre la conducta del actor del daño, que es el presupuesto de la responsabilidad entre particulares.

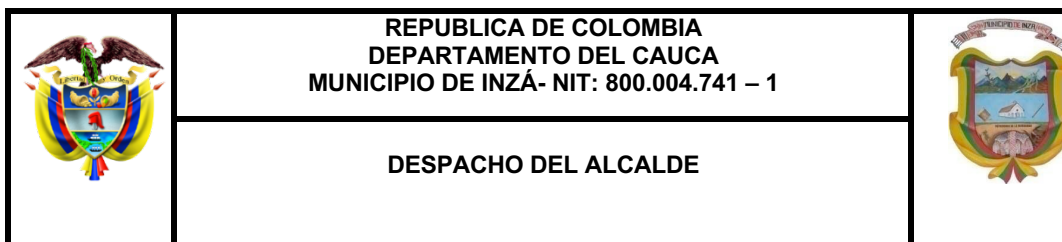
"Esta figura tal y como está consagrada en la norma propuesta, comprende las teorías desarrolladas por el Consejo de Estado sobre responsabilidad extracontractual por falta o falla del servicio, daño especial o riesgo..."¹³

Así mismo la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha asumido la anterior posición en reiteradas ocasiones¹⁴, en la cual se ha puntualizado recientemente, entre otros aspectos, lo siguiente:

"De manera tal que "la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable"¹⁵.

"La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración¹⁶. Igualmente ha considerado que se ajusta a distintos principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución¹⁷. (Negrilla fuera del texto)

"El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado a la luz el artículo 90 constitucional es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades públicas, aspecto en el cual también ha sido abordado por la jurisprudencia de esta Corporación y tratado profusamente por el Consejo de Estado. Esta última autoridad judicial ha sostenido que la imputación está ligada pero no se confunde con la



causación material, por cuanto en ciertos eventos se produce una disociación entre tales conceptos, razón por la cual para imponer al Estado la obligación de reparar un daño "es menester, que además de constatar la antijuricidad del mismo, el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un 'título jurídico' distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, la 'imputatio juris' además de la imputatio facti"¹⁸.

"La Corte Constitucional ha, de esta manera, reiterado las consideraciones del Consejo de Estado sobre los alcances del inciso primero artículo 90 de la Carta, tribunal que ha resumido su criterio en los siguientes términos:

"Son dos las condiciones indispensables para la procedencia de la declaración de la responsabilidad patrimonial con cargo del Estado y demás personas jurídicas de derecho público, a saber: el daño antijurídico y la imputabilidad del daño a alguna de ellas.

La noción de daño antijurídico es invariable cualquiera sea la clase (contractual o extracontractual) o el régimen de responsabilidad de que se trate; consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar."¹⁹

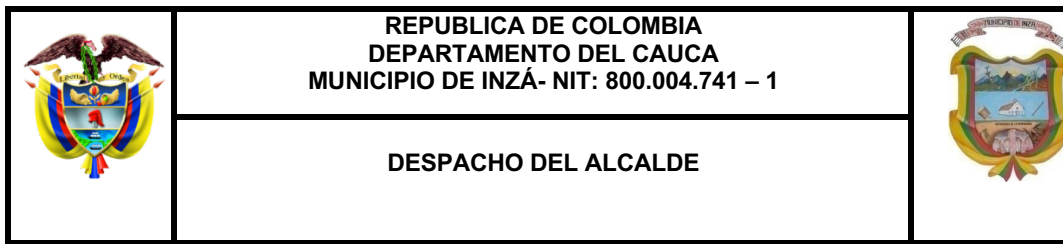
"Esta última cita es pertinente para recalcar en la cuestión objeto de estudio en la presente decisión, pues tal como lo ha entendido el Consejo de Estado, la disposición constitucional que regula la materia establece la obligación de reparar los daños antijurídicos provenientes de cualquier autoridad pública. En efecto, como se ha reiterado el precepto simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad patrimonial estatal, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública, sin hacer distingos en cuanto al causante del daño."²⁰

Por lo tanto, no existe nexo causal entre el hecho y el daño, pues el Municipio de Inzá, no contribuyó al deceso de la niña Emiliana Ultengo.

TERCERA: HECHO DE UN TERCERO

Se reitera que, los involucrados en la muerte de la menor y responsables del mismo son terceros ajenos al Municipio de Inzá atendiendo la funcionalidad y misión de ICBF, LA EPS EMSSANAR Y LAS IPS SAN JOSE.

De acuerdo a la historia clínica y expediente administrativo aportado en la demanda, el ICBF y HUSJP no prestaron una atención oportuna, personalizada, humanizada,



integral, continua y de acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y práctica profesional de conformidad con los artículos 153 de la ley 100 de 1993 y 6o de la ley 1751 de 2015.

De los supuestos facticos y del análisis crítico de las pruebas se desprende que el ICBF, EPS EMSSANAR y las IPS, no cumplieron con los principios orientadores del derecho a la salud, lo anterior por la tardanza en la remisión y por no adelantar un protocolo de intervención; todo esto conlleva a una PERDIDA DE OPORTUNIDAD O PERDIDA DE CHANCE.



Lo anterior sumado a que la EPS e IPS no cumplieron con la lex artis siendo una infracción del deber objetivo de cuidado generando con su actuar un retroceso en la salud del menor que se concreta en un resultado lesivo concurriendo para que se diera el daño padecido por las víctimas, esto es, la intervención de las IPS fue esencial para la producción del daño.

El cuadro clínico que presentó la menor debió manejarse con la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños de conformidad con el artículo 44 de la Constitución y no respondió con acciones que procuraran la protección inmediata ante la situación que amenazaban los derechos de la menor conforme al numeral 2° del artículo 40 de la Ley 1098 de 2006. El actuar de el ICBF, LAS IPS y LA EPS EMSSANAR, no se ciñeron a los protocolos médicos y administrativos recomendados conforme a los cánones de atención que requería la menor de edad.

Se altera el juicio de responsabilidad en contra del Municipio de Inzá, toda vez que en el caso bajo estudio fue un tercero el encargado de la prestación del servicio de salud y los procedimientos administrativos en los lineamientos técnicos del programa madre canguro, por ende son propietarios y operadores de los instrumentos operatorio y postoperatorio a través del cual la victima recibió la atención en salud, siendo un hecho imprevisible e irresistible para el Municipio de Inzá, toda vez que es una función técnica y funcional de ICBF, LAS IPS y LA EPS EMSSANAR, visible y detectable para ellos más no para la administración Municipal.

En consecuencia, los daños antijurídicos producidos son imputables al ICBF, LAS IPS y LA EPS EMSSANAR, quienes crearon el estado de riesgo en ejercicio de sus funciones, por lo cual está llamada a indemnizarlos.

De lo anterior se desprende la EXCEPCIÓN DE HECHO DE UN TERCERO que solicito se declare probada.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE INZÁ- NIT: 800.004.741 – 1	
	DESPACHO DEL ALCALDE	

CUARTA: CULPA DE LA VICTIMA

La omisión de los deberes de cuidado y vigilancia de los progenitores en su posición de garante de la menor fueron una de las consecuencias directas y eficientes del infortunio.

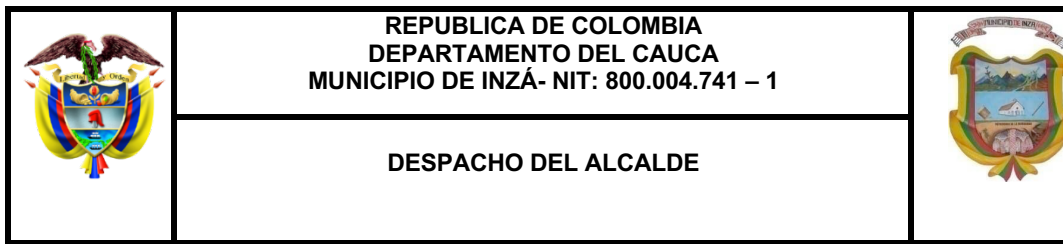
“La posición de garante es la situación en que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable. Cuando quien tiene esa obligación la incumple, y con ello hace surgir un evento lesivo que podía ser impedido, abandona la posición de garante. En sentido restringido, viola la posición de garante quien estando obligado específicamente por la Constitución y/o la ley a actuar se abstiene de hacerlo y con ello da lugar a un resultado ofensivo que podía ser impedido”.

Cabe señalar que, si el hecho es imputable a la persona que tenía el deber de protección y cuidado de la víctima, la causal de exoneración de responsabilidad que se estructura es el hecho de la víctima y no el del tercero. Así, por ejemplo, cuando un menor de edad o una persona que no tenga dominio sobre sus actos en razón de su incapacidad síquica, sufre un daño y ese daño tuviera como causa la actuación de la víctima, como sucede cuando un menor o un demente cruce intempestivamente una vía pública y sea atropellado por un vehículo, el hecho de la víctima puede ser la causa eficiente del daño, aunque esa actuación del menor o del incapaz se hubiera producido por el descuido o negligencia de aquél que tenía el deber de protegerlo.

Por otra parte, para efectos de determinar si el daño sufrido por la víctima le es o no imputable al Estado, importa establecer si su actuación fue o no la causa eficiente del mismo. Es decir, que la entidad estatal podrá ser declarada responsable del daño cuando el mismo haya sido causado por su actuación u omisión, pero cuando la causa del mismo lo sea la actuación de la propia víctima habrá lugar a exonerar a la entidad, al margen de que se trate de un menor, un incapaz o una persona que goce de todas sus facultades y hubiera obrado de manera intencional, culposa o simplemente accidental.

En otros términos, no es la voluntariedad del hecho de la víctima lo que determina la causa del daño, por lo tanto, ésta puede actuar de manera involuntaria o aún sin consciencia de lo que hace, su actuación se puede explicar por el descuido de quien tenía su guarda y, sin embargo, ese hecho cuando sea la causa eficiente del daño exonerará de responsabilidad a la entidad demandada.

La culpa exclusiva de la víctima, tal como lo advierte María Medina Alcoz, se convierte en una circunstancia exoneradora de la responsabilidad del supuesto agente dañoso



cuando se “erige en como la única causa adecuada del daño, ya que rompe el nexo causal entre el comportamiento de éste y el resultado producido.

De lo anterior, se desprende que los daños sufridos por la víctima habrán de imputarse sólo a ella, en virtud del principio casum sentit dominus, porque sólo ella se los ha causado y —como dijo UNGER— per eam stetit.



“La doctrina también ha justificado la eficacia exoneradora con la afirmación, derivada de la regla pomponiana («Quod quis ex culpa sua damnum sentit non intelligitur damnum sentire»), de que «el daño que uno se causa a sí mismo no es daño en sentido jurídico», expresión ésta que, en sí, no es rigurosamente correcta y que debe ser objeto de matización, en el sentido de que quiere decirse que es un daño que no sirve para la imputación de responsabilidad civil alguna, porque es un «daño aparente », al no haber mecanismo jurídico alguno que permita transferirlo a un sujeto distinto de la víctima”

El hecho de la víctima, como elemento exonerador de la responsabilidad debe haber “incidido decisivamente en la producción de los hechos o, de otra parte, no se encuentre en posición de garante, en cuyo caso el resultado le será imputable materialmente (imputatio facti).

Cabe reiterar, como lo ha precisado el precedente reiterado y pacífico de las Altas Cortes que en los eventos en los cuales la actuación de la víctima resulta ser causa única o concurrente del daño, carece de relevancia la valoración de su subjetividad, porque si la causalidad constituye un aspecto objetivo, material de la responsabilidad, la labor del juez frente a un daño concreto debe limitarse a verificar si dicha conducta fue o no la causa eficiente del daño, sin que para ello importe establecer si al realizarla, su autor omitió el deber objetivo de cuidado que le era exigible, o si su intervención fue involuntaria. Por tal razón, resulta más preciso señalar que la causal de exoneración de responsabilidad del demandado es el hecho de la víctima y no su culpa.

En el caso sub examine, es indiscutible que el comportamiento que generó el daño proviene de la omisión en el deber de cuidado en su posición de garante y buen padre de familia de sus progenitores, así las cosas, el hecho exclusivo y determinante de la víctima, se refiere a la verificación de circunstancias que tornan inimputable el daño al Municipio de Inzá.

De lo anterior se desprende la EXCEPCIÓN DE CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA que solicito se declare probada.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE INZÁ- NIT: 800.004.741 – 1	
	DESPACHO DEL ALCALDE	

QUINTA: LA ECUÁNIME O GENÉRICA

Solicito comedidamente que cualquier hecho o derecho a favor de mi representado y que resultare probado dentro del proceso, sea declarado como tal en la sentencia, como quiera que en éste tipo de trámites el juez oficiosamente deba declarar probadas las excepciones que resulten de los hechos acreditados en el proceso.

4. A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Lo anterior es base fundamental a mi oposición de todas y cada una de las pretensiones de la parte demandante, ya que no son procedentes teniendo como sustento las siguientes excepciones de responsabilidad

- Hecho de un tercero
- Culpa exclusiva de la víctima
- Inexistencia de la falla del servicio e inexistencia del nexo de causalidad.
- Falta de legitimación en la causa material por pasiva,



No tienen vocación de prosperidad teniendo en cuenta que no están probados los supuestos de hecho de las normas de las cuales persigue las consecuencias jurídicas al Municipio de Inzá, destacando que **NO EXISTE FALLA EN EL SERVICIO, NI RELACIÓN DE CAUSALIDAD** entre los presuntos daños aducidos por la parte demandante y alguna acción u omisión del Municipio.

En consecuencia, reitro mi oposición a que se acceda a las declaraciones y condenas solicitadas ya que no son de recibo estas pretensiones respecto del Municipio por ello no son procedentes condenas por ningún concepto y tampoco resulta aplicable los efectos de los artículos 187 y 192 de la Ley 1437 de 2011.

Se solicitó denegar las súplicas de la demanda respecto del Municipio de Inzá y en consecuencia declarar las excepciones de falta de legitimación en la causa material por pasiva, culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, inexistencia de falla del servicio y de nexo causal entre el daño aducido y alguna acción u omisión del Municipio de Inzá.

Asi mismo, reconocerme personería para actuar en el proceso de la referencia.

5. PRUEBAS

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE INZÁ- NIT: 800.004.741 – 1	
	DESPACHO DEL ALCALDE	

Con la demanda se aportó el expediente administrativo que contiene los antecedentes de la actuación objeto del proceso y la historia clínica que tendrán que ser contrastada en la oportunidad procesal pertinente.

Con las pruebas obrantes en el expediente judicial se prueban las excepciones propuestas con la contestación de la demanda del Municipio de Inzá.

Con relación a las declaraciones y los documentos privados declarativos emanados de tercero,s solicito al Despacho la ratificación de conformidad con el artículo 222, 225 y 262 de la Ley 1564 de 2012 por integración normativa y remisión expresa de los artículos 211 y 306 de la Ley 1437 de 2011.

La parte demandante deberá notificar a los terceros que emitieron dichos documentos con la finalidad de que rindan testimonio y ratifiquen el contenido de los mismos. Tales documentos son los registros fotográficos, videos, declaraciones y constancia de gastos para determinar cómo y quién erogó dichos gastos.

De no ratificarse dichos documentos su presunción de autenticidad se excluirá de conformidad con el inciso 2 del artículo 244 del C.G.P.



Respecto de las pruebas solicitadas dar aplicación al numeral 5 del artículo 162 de la Ley No. 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 10 del artículo 78 y los artículos 212 y 173 de la Ley No. 1564 de 2012.

A los demás documentos aportadas dársele el valor probatorio señalado en el ordenamiento jurídico siempre y cuando no sean contrarios al mismo.

6. ANEXOS

Me permito anexar poder a mi favor, los documentos aducidos como pruebas y copias de la contestación de la demanda con sus anexos para el traslado al demandante y para el archivo del juzgado.

7. NOTIFICACIONES

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE INZÁ- NIT: 800.004.741 – 1	
	DESPACHO DEL ALCALDE	

AL DEMANDANTE: en la dirección que aportó en el escrito de la demanda, correo electrónico: aefernandez@unicauca.edu.co.

A LOS DEMANDADOS:

MUNICIPIO DE INZA: En el Centro Administrativo Municipal de Inzá o al correo electrónico: notificacionjudicial@inzá-cauca.gov.co, y alcaldía@inza-cauca.gov.co

ICBF: al correo electrónico, notificaciones.judiciales@icbf.gov.co, Monica.Medina@icbf.gov.co, Nury.Mompothes@icbf.gov.co

EMSSANAR: al correo electrónico, emssanarsas@emssanar.org.co



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE: al correo electrónico, juridica@hospitalsanjose.gov.co

MUNICIPIO DE POPAYAN: al correo electrónico, notificacionesjudiciales@popayan.gov.co

AL SUSCRITO: En la Carrera 6 No. 22 N – 03 de Popayán, al celular 3104101165 o al buzón electrónico del Municipio de Inzá: notificacionjudicial@inza-cauca.gov.co, alcaldia@inza-cauca.gov.co

De la señora Juez,


MIGUEL ÁNGEL ARIAS ORTEGA
 C.C. No. 76.245.538 de Inzá
 T.P. No. 123134 C.S.J.

	<p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE INZÁ- NIT: 800.004.741 – 1</p>	
	<p>DESPACHO DEL ALCALDE</p>	

Doctora

JENNY XIMENA CUETIA FERNANDEZ

Juez Decimo Administrativo de Popayán

Carrera 4 No. 1 – 67 Barrio La Pamba

Popayán (Cauca)

Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Radicado: 19-001-33-33-010-2021-00025-00

Accionante: Maryi Yeraldin Ultengo Sánchez

Accionado: Municipio de Inzá y Otros



GEIDY XIOMARA ORTEGA TRUJILLO, mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi respectiva firma, obrando en representación del Municipio de Inzá, en mi calidad de Alcaldesa Municipal, llego ante esa Corporación, con el fin de manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente al doctor **MIGUEL ÁNGEL ARIAS ORTEGA**, identificado como aparece al pie de su firma, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional N°123134 del Consejo Superior de la judicatura, para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del C.P.A.C.A, asuma la defensa de los intereses del Municipio de Inzá, interviniendo en **EL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA** de la referencia propuesto por los señores Maryi Yeraldine Ultengo Sancho; Germán Ultengo; Esneida Sancho Ultengo, Edwin Faiver Ultengo Sancho, Yaira Andrea Ultengo Sancho, Odeiva Sancho Ultengo, Mileydi Sancho Ultengo, Yilder Sancho Ultengo, Arnulfo Sancho Sánchez, Ernestina Ultengo Pajoy, Manuel Eliseo Sancho Sánchez, José Belmer Ultengo Oidor, Luz Enid Sancho Ultengo, Biyeli Aide Sancho Ultengo, Amelia Sancho Ultengo, Natalia Ultengo Sancho por los perjuicios que se les pudieron causar como consecuencia de las lesiones padecidas con ocasión del fallecimiento de la menor Emiliana Ultengo Sancho.

Mi apoderado queda facultado para ejercer la representación judicial y en especial contestar la demanda, asistir personalmente a las audiencias, solicitar y presentar pruebas, presentar alegatos de conclusión, transigir, conciliar, sustituir, reasumir, interponer, sustentar recursos y en general todas las facultades contempladas en el artículo 74, 75 y ss del C.G.P. y todo cuanto en derecho se estime conveniente y a las actuaciones que hubiere lugar. Así mismo, para cualquier notificación favor dirigirla al correo electrónico: notificacionjudicial@inza-cauca.gov.co, maop5538@gmail.com.



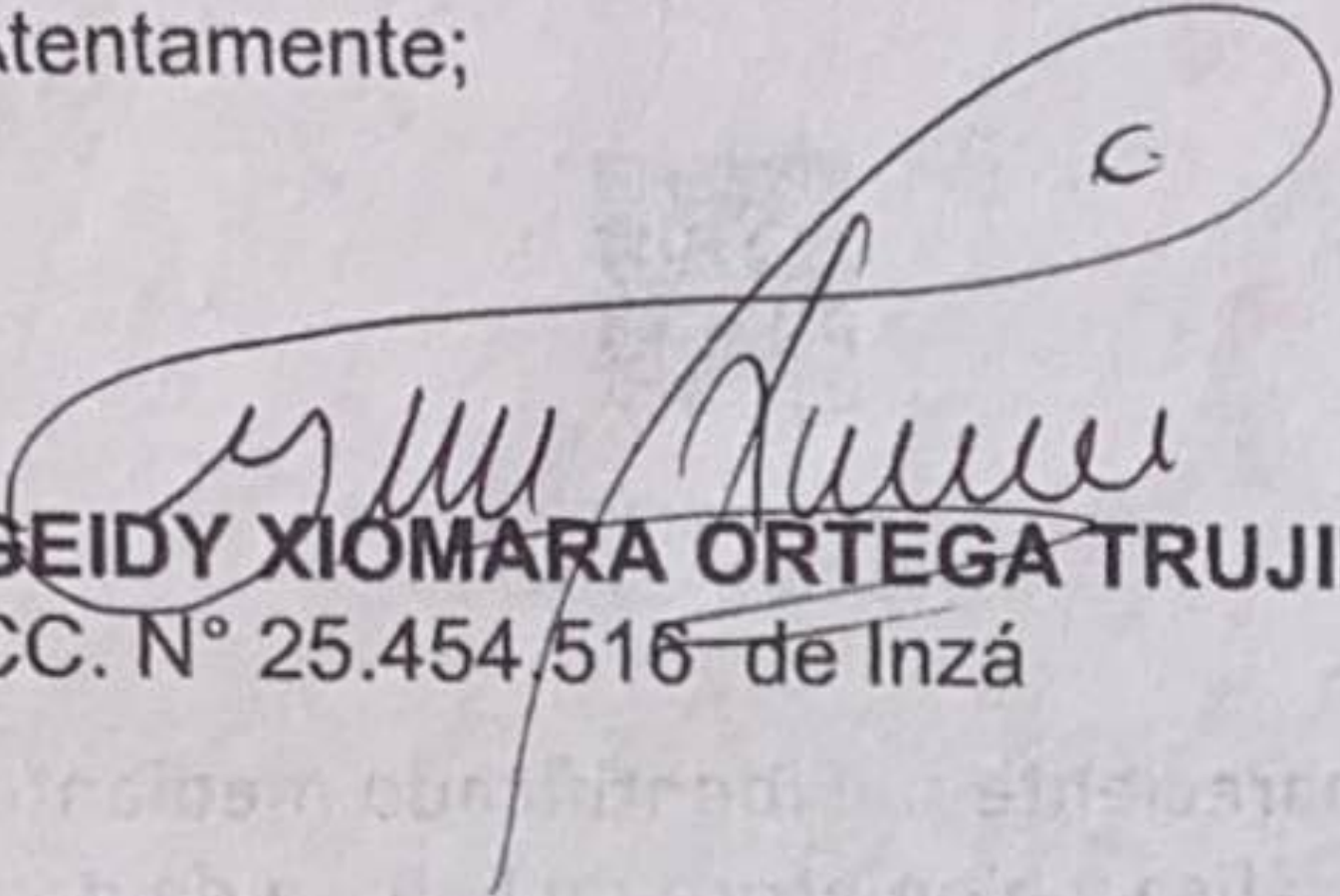
CAM-Barrio Centro
Correo Electrónico: alcaldia@inza-cauca.gov.co
Teléfono: 3133994146

**Inzá, nuestro proyecto
en común**

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE INZÁ- NIT: 800.004.741 – 1	
	DESPACHO DEL ALCALDE	

Sírvase señor Juez, reconocerle personería al Doctor **MIGUEL ÁNGEL ARIAS ORTEGA** en los términos y para los fines señalados.

Atentamente;


GEIDY XIOMARA ORTEGA TRUJILLO
CC. N° 25.454.516 de Inzá

ACEPTO


MIGUEL ÁNGEL ARIAS ORTEGA
C.C. No. 76.245.538 de Inzá
T.P. No. 123134 C.S.J.

**DOCUMENTO
CON ESPACIO
EN BLANCO**



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



9576612

En la ciudad de Inza, Departamento de Cauca, República de Colombia, el veintiseis (26) de marzo de dos mil veintidos (2022), en la Notaría Única del Círculo de Inza, compareció: GEIDY XIOMARA ORTEGA TRUJILLO, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 25454516 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----



v4z2xdwgx4mo
26/03/2022 - 10:00:45

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se vincula al documento de Diligencia de reconocimiento de firma y contenido de documento privado signado por el compareciente, en el que aparecen como partes 1, sobre: PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, OTORGADO AL CIUDADANO, MIGUEL ANGEL ARIAS ORTEGA, DIRIGIDO AL JUEZ DECIMO ADMINISTRATIVO DE POPAYAN.



OSCAR ALECIO RAMOS GRANJA

Notario Único del Círculo de Inza, Departamento de Cauca

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co

Número Único de Transacción: v4z2xdwgx4mo

**DOCUMENTO
CON ESPACIO
EN BLANCO**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO
INZÁ-CAUCA

ACTA DE POSESION DE LA CIUDADANA GEIDY XIOMARA ORTEGA TRUJILLO,
COMO ALCALDESA POPULAR DEL MUNICIPIO DE INZA CAUCA.-.....

En la República de Colombia, Departamento del Cauca, Municipio de Inzá-Cauca, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las diez y treinta minutos de la mañana (10.30 a.m.), compareció ante el despacho del suscrito **OSCAR ALECIO RAMOS GRANJA**, Notario Único del Círculo de Inzá-Cauca, la ciudadana **GEIDY XIOMARA ORTEGA TRUJILLO**, mayor de edad, vecina del Municipio de Inzá-Cauca, quien se identificó con la cédula de ciudadanía Nro. **25.454.516**, expedida en Inzá-Cauca, con el fin de tomar posesión del cargo de Alcaldesa Municipal de Inzá-Cauca, para el cual fue elegida por votación popular realizada el día veintisiete (27) del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), por el partido **JUNTOS PARA LLEGAR, JUNTOS PARA GOBERNAR**, para el período **2020-2023**, de conformidad con certificación expedida por los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal de Inzá-Cauca, de fecha veintinueve (29) del mes de octubre del cursante año; para este menester presentó los siguientes documentos: Copia de su cédula de ciudadanía; certificación de la Comisión escrutadora donde es declarada como Alcaldesa electa; hoja de vida, con todos sus soportes, donde consta entre otros, que es maestra bachiller del Normal Nacional de Belalcazar-Cauca, (presenta copia del diploma de bachiller), que es Microbióloga, y Magister en ciencias biológicas, presenta copia de las actas de grado; número de identificación tributaria **25454516-8**; certificado de antecedentes fiscales; certificado de antecedentes disciplinarios; certificado de antecedentes policivos y judiciales; declaración juramenta de bienes y rentas; declaraciones juramentadas donde la compareciente manifiesta que a la fecha no posee procesos por alimentos, ni por inasistencia alimentaria; igualmente que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades, e incompatibilidades establecidas por nuestro ordenamiento legal (La Constitución y la Ley, entre otros), para ejercer el cargo; de la misma manera, declaración extraproceso de la Notaría Única de Inzá-Cauca, donde tanto ella como su señor esposo manifiestan que a la fecha el valor de los bienes que poseen, ascienden a la suma de **OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE (\$80.000.000.00)** aproximadamente; declaración extraproceso donde la compareciente y su esposo, manifiestan que no administran bienes de sus hijos no emancipados; certificado expedido por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), donde se establece que la compareciente, participó en el seminario "Inducción para Alcaldes y Gobernadores electos período 2020-2023", celebrado en la ciudad de Bogotá D.C., los días 25, 26 y 27 del mes de noviembre del año en curso; certificado.....

CONTINUACION DEL ACTA DE POSESION DE LA CIUDADANA GEIDY XIOMARA ORTEGA TRUJILLO, PARA OCUPAR EL CARGO DE ALCALDESA POPULAR DEL MUNICIPIO DE INZA CAUCA.-.....

médico donde se establece que la compareciente, está en condiciones físicas y mentales para desempeñar el cargo que asume; En tal virtud, el suscrito Notario procedió a recibirle el juramento de rigor, previa la imposición y lectura de los artículos 269 de la ley 600 del año 2000 y 389 de la Ley 906 de 2004, de conformidad con lo estipulado en los artículos 122.2 de la Constitución Nacional, 251 de la ley 4ª del año 1913, 2.2.5.7.2 del Decreto 1083 de 2015, y demás normas concordantes, le pregunté ¿Jura usted por Dios Todopoderoso y promete solemnemente a la Patria, cumplir bien y cabalmente con la Constitución y las leyes de la República, y adelantar de conformidad con su leal saber y entender las funciones que el cargo que asume le impone?, la posesionada contesto. Si, lo juro. Si así lo hiciere, Dios y la Patria la premien, y si no, él y ella os lo demanden; acorde con lo establecido en las normas precedentes, la posesionada juró cumplir la Constitución y las leyes Colombianas y ejercer el cargo que el pueblo le discierne, acorde con su leal saber y entender y en pro de los intereses de la comunidad de Inzá-Cauca; los documentos presentados formarán parte de esta acta; La presente posesión surge efectos fiscales a partir del día uno (1) del mes de enero del año dos mil veinte (2020). No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las personas que en la misma intervinieron.

La posesionada,


GEIDY XIOMARA ORTEGA TRUJILLO.

C.C. Nro. 25.454.516, exp. Inzá-Cauca.


OSCAR ALECIO RAMOS GRANJA.

Notario Único del Círculo de Inzá-Cauca.

unicainza@supernotariado.gov.co

Carrera 5 Nro. 2A -64. B. Delicias.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 25.454.516

ORTEGA TRUJILLO

APELLIDOS

GEIDY XIOMARA

NOMBRES



[Signature]
Firma



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-SEP-1979

INZA
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

18-OCT-1997 INZA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1103100-00777827-F-0025454516-20151220

0047787125G 2

43811576

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **76.245.538**

ARIAS ORTEGA

APELLIDOS
MIGUEL ANGEL

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-JUL-1973**

INZA
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

05-JUL-1991 INZA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1100100-00151813-M-0076245538-20090306 0010181842A 1 32000487

REGISTRARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

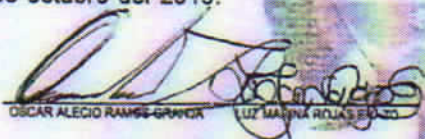
E-27

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA MUNICIPAL

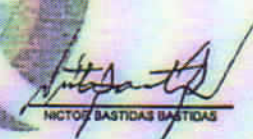
DECLARAMOS

Que, GEIDY XIOMARA ORTEGA TRUJILLO con C.C. 25454516 ha sido elegido(a) ALCALDE por el Municipio de INZA - CAUCA, para el periodo de 2020 al 2023, por el PARTIDO COALICIÓN JUNTOS PARA LLEGAR, JUNTOS PARA GOBERNAR.

En consecuencia, se expide la presente CREDENCIAL, en INZA (CAUCA), el martes 29 de octubre del 2019.


OSCAR ALECIO RAMBO-GRANIER

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA


NICTOR BASTIDAS BASTIDAS

SECRETARIOS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

220116

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

123134 Tarjeta No.	03/07/2003 Fecha de Expedición	30/05/2003 Fecha de Grado	
MIGUEL ANGEL ARIAS ORTEGA	CUNDINAMARCA Consejo Seccional		
76245538 Cédula			
DE LOS ANDES Universidad			


Presidente Consejo Superior
de la Judicatura



38448

ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.

SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS.